

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos Rol N° C-16-2021 del 1° Juzgado de Letras de Punta Arenas, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintidós, se hizo lugar a la demanda deducida por el abogado señor Pablo Ignacio Harambour Castillo, en representación de don Oscar Rogelio Franco Duguet, por indemnización de perjuicios por daño moral, contra el Fisco de Chile, condenándolo a pagar a título de daño moral, la suma de ciento ochenta millones de pesos (\$180.000.000).

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por sentencia de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la confirmó con declaración rebajando el monto a la suma de cincuenta millones de pesos (50.000.000).

Contra esa sentencia el abogado señor Pablo Ignacio Harambour Castillo por la parte demandante, dedujo recurso de casación en la forma, el que se ordenó traer en relación.

Considerando:

Primero: Que, en cuanto al recurso de casación en la forma, el recurrente denuncia como primer error de los sentenciadores la infracción al artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, ultrapetita, ya que el demandado limitó sólo a los 3 criterios que están desarrollados en el cuarto agravio de la apelación, que son: -Que el fallo es excesivo en comparación a otros casos -Que el fallo es excesivo en comparación a casos de desaparecidos y/o muerte. -Que debiese aplicarse por similitud del caso de Miranda con Fisco de Chile.



Indica que el Tribunal al fallar, considerando como elemento de rebaja del monto un factor no peticionado en la excepción analizada, sin desarrollo y/o fundamento que hagan exigible la enmienda del fallo de primera instancia sobre ese punto, implica que el Tribunal ha incurrido en la causal de ultra petita, ya que otorga más allá de lo pedido por el demandado como elemento de enmienda conforme a derecho del fallo de primera instancia. Se trata además, de un punto no sometido a la decisión del Tribunal, ya que no consta argumentación alguna en el recurso de apelación, vinculado a la compensación o imputación de dichos montos para la reducción del quantum indemnizatorio.

El segundo vicio de casación en cuanto a la causal de ultra petita, se desprende directamente de la lectura del considerando duodécimo. Ya que los sentenciadores se limitaron sólo a ponderar el daño en base al factor de días como también, a limitarlo sólo a la primera privación de libertad de su representado (Regimiento Caupolicán de la ciudad de Porvenir), lo implica pasar por alto el resto de privaciones de libertad en la Tercera Comisaría de Carabineros de Porvenir, y/o la omisión del resto de los elementos determinantes expuestos por dicha parte, sin que hubiese petición por la demandada para tales limitaciones, implica ante una causal de ultra petita.

Segundo: Que la defensa esgrime como segunda causal de casación la contemplada en el artículo 768 N° 5 en relación 170 N° 4 ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Refiere que no consta en autos petición, sea en la contestación, duplica, recurso de apelación interpuesto por la contraria, de que se limite el quantum indemnizatorio en proporción a los días de privación de libertad, y/o a que sólo sea



respecto del tiempo que estuvo su representado en el Regimiento Caupolicán (3 días). Como tampoco consta solicitud, petición relacionada a excluir el tiempo de privación de libertad relacionado a la Tercera Comisaría de Carabineros de Porvenir, y el resto de elementos que se omitieron por el sentenciador para rebajar la indemnización.

Tercero: Que, respecto a la primera causal de nulidad formal, esta Corte ya ha asentado que el defecto formal de ultra petita ocurre cuando la sentencia, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones y excepciones o defensas, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. Luego, se hace necesario dilucidar si en la especie el fallo objetado que confirmó la sentencia de primer grado existe un desajuste entre lo resuelto y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. Al efectuar el examen aludido entre los extremos que señala la doctrina, esto es, acción y excepción o defensa, respecto a lo decidido, se concluye que no existe discordancia alguna, por cuanto la sentencia rebaja el monto de la indemnización.

Al efectuar el examen aludido entre los extremos que señala la doctrina, esto es, acción y excepción o defensa y lo decidido, se concluye que no existe discordancia alguna entre lo pedido y lo negado, por cuanto la sentencia recurrida rebaja el monto de la indemnización, lo anterior queda en evidencia en el punto del auto de prueba que señala *“2.- En la afirmativa del punto anterior, efectividad de haberse ocasionado perjuicios al actor, imputable a la parte demandada. Naturaleza y monto del daño”*.



Asimismo el Consejo de Defensa del Estado en el escrito de apelación a la sentencia definitiva funda como tercer motivo de agravio el monto de la indemnización fijado en la sentencia de primera.

En consecuencia, el pronunciamiento censurado no se aleja de lo discutido en el proceso, resultando evidente que los sentenciadores han actuado dentro del ámbito de las atribuciones que les son propias, por habérselas otorgado los litigantes en sus escritos fundamentales o por el propio ordenamiento jurídico, sin que se hayan extendido a puntos no sometidos a su decisión. Que, en esta línea de razonamiento no resulta admisible -por este primer capítulo- el recurso de casación en la forma interpuesto.

Cuarto: Que, en relación a la segunda causal de casación fundada en el artículo 768 N° 5 en relación al artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, de la lectura del recurso se advierte que lo que se les reprocha a los jueces del fondo es haber rebajado la indemnización por el daño moral padecido por las demandantes sin efectuar las debidas consideraciones de hecho y de derecho que sirven de apoyo a su decisión judicial

Con estos argumentos solicitó la invalidación de la sentencia, a fin que en su reemplazo se resuelva acoger la demanda en todas sus partes, determinando el monto indemnizatorio que fijó el tribunal de primera instancia.

Quinto: Que en relación al vicio de casación formal denunciado, se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda



resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran *–en lo que atañe al presente recurso–* en su numeral 4°, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

4°) Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.

Agrega que si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida *–prosigue el Auto Acordado–* deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta



anteriormente. Prescribe, enseguida, que una vez establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera.

5°) Que la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017 de 8 de enero de 2017).

6°) Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías de debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo,



Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior, constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980.

7º) Que útil resulta traer a colación lo expresado por los juristas nacionales don Mario Mosquera Ruiz y don Cristián Maturana Miquel, en su libro “Los Recursos Procesales”, quienes al analizar precisamente la causal del aludido arbitrio han dicho:

“En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones mas no en la impropiedad de estas; la circunstancia que las consideraciones sean erradas o deficientes no se sanciona con la nulidad del fallo, puesto que ese vicio se constituye según la ley por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce, asimismo, cuando entre sí son contradictorias o se destruyen unas a otras” (MOSQUERA RUIZ, Mario y MATURANA MIQUEL, Cristián: Los Recursos Procesales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2010. P. 250).

8º) Que, el que la determinación del monto dinerario que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito



asentado, deba necesariamente realizarse *prudencialmente*, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no conlleva que esa evaluación sea arbitraria y antojadiza para el órgano jurisdiccional, sino que ante la imposibilidad de concretarla sirviéndose de fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela y moderación, lo que por cierto le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, pero que no implica en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a arribar a esa conclusión.

9º) Que, al dictar la sentencia impugnada confirman la sentencia apelada con declaración que se reduce el monto de la indemnización ordenada por daño moral a la suma de cincuenta millones de pesos (\$ 50.000.000), razonando para ello en el considerando duodécimo lo siguiente:

“Que, por otra parte, se alega que la indemnización otorgada por daño moral resulta excesiva.

Al respecto, se debe considerar que si bien los hechos acreditados dan cuenta de una privación de libertad en términos graves, violentos y vejatorios, es el elemento tiempo el que requiere un análisis especial en esta causa, toda vez que la permanencia del demandante en esta condición fue relativamente menor a la que se observa normalmente, a saber, 3 días, sin perjuicio, de manifestaciones posteriores de torturas, amenazas y vejaciones en su persona, debiendo considerarse, en todo caso, que en situaciones distintas, de prolongadas



privaciones de libertad, los Tribunales Superiores de Justicia, han establecido indemnizaciones notoriamente menores”.

10°) Que de la lectura del recurso y la sentencia recurrida, no se evidencia la falta de fundamentación alegada, pues únicamente se plantea una discrepancia en torno a los fundamentos para rebajar la indemnización, discordándose solo de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de fundamentación, desde que la sentencia entrega los basamentos que conducen a la decisión alcanzada, por lo que sólo resta concluir que la impugnación formulada por la defensa dan cuenta de una mera discrepancia con las conclusiones a las que arriba el tribunal, por lo que las denuncias relativas a una presunta falencia en el razonamiento no será admitida, desestimándose el arbitrio en este punto.

Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 767 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en la forma, deducido por el abogado Pablo Ignacio Harambour Castillo, en representación de don **OSCAR ROGELIO FRANCO DUGUET**, en contra de la sentencia de **veintitrés de enero de dos mil veintitrés**, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol 326-2022, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

Rol N° 13.400-2023

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Ministra Sra. María Teresa Letelier R.,



Ministra Suplente Sra. Eliana Quezada M. y el Abogado Integrante Sr. Diego Munita L. No firma el Abogado Integrante Sr. Munita, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



En Santiago, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

